

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., primero (01) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00263-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por la ciudadana **AMINTA BARRETO GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía C.C 20.927.094 contra el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA**.

ANTECEDENTES

La ciudadana **AMINTA BARRETO GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía C.C 20.927.094 inicia acción de tutela contra el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA** por considerar que se le está vulnerando el derecho de **petición y el derecho a la igualdad**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que interpuso derecho de petición de interés particular ante el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA** solicitando fecha cierta de cuándo se va a otorgar el subsidio de vivienda a que tiene derecho como víctima del desplazamiento forzado.

Indica que en el momento se encuentra en estado de vulnerabilidad, cumple con los requisitos exigidos para obtener el subsidio de vivienda como lo ordena la ley y la jurisprudencia en la Tutela 025 de 2004.

Que el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIEDA** no se manifiesta ni de forma ni de fondo frente a la petición que elevó, violando el derecho a la igualdad y los demás consignados en la tutela T025 de 2004.

Manifiesta que el Ministerio de Vivienda informó públicamente que va a entregar la II FASE DE VIVIENDAS GRATUITAS para familias vulnerables sin que se manifieste acerca de cómo acceder a ello.

En virtud de lo anterior solicita se ordene al **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA** contestar el derecho de petición de fondo y de forma, indicando en qué fecha se va a otorgar el subsidio de vivienda.

Así mismo, se disponga conceder el derecho a la igualdad, a una vivienda digna y cumplir con lo ordenado en la Sentencia T-025 de 2004, asignándole su subsidio de vivienda.

Por otro lado, se ordene proteger los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad por el desplazamiento, proteger los derechos de los adultos mayores y de las personas discapacitadas y concederle el subsidio de vivienda.

Finalmente, se la incluya dentro del programa de la II Fase de Viviendas Gratuitas anunciadas por el Ministerio de Vivienda, pues cumple con el estado de vulnerabilidad.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

Copia del derecho de petición dirigido al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA, radicado bajo el No. 2020ER0060331 del 07 de julio de 2020.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 19 de agosto de 2020, se ordenó la notificación del **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 20 de agosto de 2020, se notificó al **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud, quien brindo contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término

señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

Del caso en concreto.

Corresponde a la Juzgadora determinar si el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA** viola los derechos fundamentales de **PETICIÓN, IGUALDAD** de la ciudadana **AMINTA BARRETO GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía C.C 20.927.094 al no proceder a contestar el derecho de petición elevado el 07 de julio de 2020 y radicado bajo el No. 2020ER0060331.

Obra derecha de petición, pretendiendo: “1. Se conceda dicho subsidio y se me dé una fecha cierta de cuándo se va a otorgar dicho subsidio.2. Se me inscriba en cualquier programa de subsidio de vivienda nacional.3. Se me asigne una vivienda del programa de la II Fase de viviendas gratuitas que ofreció el estado.4. Informarme si me hace falta algún documento para acceder a la vivienda como víctima del desplazamiento forzado o en el programa de la II fase de viviendas.5. De acuerdo a la respuesta expedida por ustedes en caso de ser necesario se envíe copia de esta petición al DPS. Para la selección para obtener subsidio de vivienda bien sea en especie o en dinero.6. Se me informe si me incluyen en la II Fase de Viviendas Gratuitas como persona víctima del desplazamiento forzado”.

En la respuesta allegada por la entidad accionada, informó:

“(…) Consulta 1. Se conceda dicho subsidio y se me dé una fecha cierta de cuándo se va a otorgar dicho subsidio. De acuerdo al módulo de consultas del Ministerio de Vivienda registra “Calificados. Proceso: Bolsa Desplazados – VI Proceso de Asignación” Desplazados Convocatoria 2007 así: (...)”

El estado “calificado” significa, que el hogar ha cumplido con los requisitos y condiciones necesarias exigidas para acceder al subsidio familiar de vivienda urbano. No obstante, no fue posible incluirlo en las Resoluciones de asignación proferidas por Fonvivienda.

2. Se me inscriba en cualquier programa de subsidio de vivienda nacional. La entidad viene cambiando las políticas de vivienda para que los hogares en situación de desplazamiento, puedan recibir el subsidio familiar de vivienda al cual se postularon, a través de un cupo dentro de un proyecto de vivienda que haya presentado la entidad territorial del domicilio o dentro de los proyectos que igualmente la entidad territorial haya presentado dentro de las fechas de convocatoria para los constructores interesados en presentar sus propuestas para la construcción de vivienda gratuita dentro del programa de las 100 mil viviendas gratis”.

3. Se me asigne una vivienda del programa de la II Fase de viviendas gratuitas que ofreció el estado. De acuerdo a la normatividad vigente, no se puede asignar directamente una vivienda, dentro del programa de las cien mil viviendas, teniendo en cuenta que existe un procedimiento para tal fin.

4. Informarme si me hace falta algún documento para acceder a la vivienda como víctima del desplazamiento forzado o en el programa de la II fase de viviendas. (...) por tanto siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que la asignación del subsidio familiar de vivienda, está sometido al procedimiento aquí descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para Prosperidad Social, como por Fonvivienda.

5. De acuerdo a la respuesta expedida por ustedes en caso de ser necesario se envíe copia de esta petición al DPS. Para la selección para obtener subsidio de vivienda bien sea en especie o en dinero. (...) Esta entidad no es competente para realizar estos trámites ante el DPS, toda vez que se debe tener en cuenta el proceso de registro indicado anteriormente, a efectos de obtener el subsidio familiar de vivienda.

6. De acuerdo a la respuesta expedida por ustedes en caso de ser necesario se envíe copia de esta petición al DPS. Para la selección para obtener subsidio de vivienda bien sea en especie o en dinero. (...) Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, no corresponde al Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, la selección de los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas cien por ciento subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el DPS, según los porcentajes de composición poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto reglamentario, teniendo en cuenta que se verificara que se encuentren en la RED UNIDOS y posteriormente en el SISBEN III”.

De lo anterior el Despacho pasa a realizar las siguientes consideraciones.

La respuesta dada por FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA no reúne las características señaladas por la Honorable Corte Constitucional nótese que en la resolución a la petición número uno, se indica que el estado de la accionante es calificado, sin embargo, no se logró incluirla en las resoluciones, sin especificarse cuál fue el motivo de esa decisión; por otra parte, en la respuesta dada a la petición dos, no se indica nada frente al interrogante de inscripción que eleva el accionante y finalmente en la respuesta dada a la petición seis se transcribió la petición número cinco; por lo que, aquella quedo sin resolverse.

Una petición no se considera debidamente tramitado con su recepción, ni tampoco con una respuesta laxa y abierta, pues por mandato constitucional la entidad ante quien se haya elevado la solicitud está en la obligación de proveer al ciudadano de una respuesta pronta que satisfaga plenamente sus deprecaciones, entonces, de no cumplirse con estos supuestos, el juez constitucional, estará en la obligación de requerir a quien vaya en contravía del derecho fundamental para que entre a resolver de manera inmediata el asunto objeto de pedimento, como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional en Sentencia T-523/10 de la siguiente manera.

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**” (subrayado y negrilla por el Despacho).

En consecuencia y dando cumplimiento a lo dicho por la H. Corte Constitucional, y como quiera que, a la presentación de este Instrumento Constitucional, no se ha dado respuesta de fondo, clara y precisa al derecho de petición solicitado por la accionante, se considera que no se han satisfecho los requisitos jurisprudenciales establecidos para tal fin.

En eventos como el del caso bajo estudio, la Corte ha reconocido que la omisión de respuesta constituye una violación de este derecho fundamental, y que además da lugar a su protección mediante la acción de tutela, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias para el funcionario que negligentemente ha omitido cumplir con su deber. Así lo sostuvo esta Corporación en la sentencia T-242/93.

Por lo anterior y sin más consideraciones se tutelarán los derechos fundamentales invocados por el actor, en consecuencia se ordenará al **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA**, para que dentro del término de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado por la ciudadana **AMINTA BARRETO GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía C.C 20.927.094. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: Tutelar el Derecho de Petición invocado por la ciudadana **AMINTA BARRETO GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía C.C 20.927.094, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ordenar al **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA**, para que dentro del término de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado por la ciudadana **AMINTA BARRETO GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía C.C 20.927.094. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. **Oficiese.**

TERCERO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

CUARTO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

fdb9fee0270ca453c14258805c7b13b9ad845c1601560da34e1d2b439906a59d

Documento generado en 01/09/2020 12:47:21 p.m.